



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Como cuestión previa, es preciso recordar que el artículo 1 de la Orden CTE/711/2002 delimita su ámbito de aplicación, indicando que la misma tiene por objeto “la delimitación de los datos personales que podrán figurar en las guías telefónicas impresas o electrónicas, así como los que podrán obtenerse a través de servicios de consulta telefónica” (apartado 1), “el establecimiento de las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado en un marco de competencia” (apartado 2) y la regulación del suministro de los datos sobre abonados que los operadores están obligados a proporcionar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones”, a fin de que por la misma dichos datos sean puestos a disposición de las entidades que elaboren guías telefónicas impresas o electrónicas, provean servicios de consulta telefónica sobre números de abonados o presten servicios de llamadas de urgencia, bien por prestarlos a través del número 112 o por haber sido determinadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (apartado 3).

De los tres ámbitos citados son el primero y el tercero los que guardan incidencia en materia de protección de datos y afectan a las competencias de esta Agencia por cuanto se refiere, en primer lugar, al tratamiento de los datos de abonados o usuarios en guías de comunicaciones electrónicas y, en segundo lugar, a la cesión de los datos de dichos abonados o usuarios por parte de los operadores a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y por ésta última a quienes presten los servicios de guías y consulta sobre



número de abonado. Por el contrario, la competencia de esta Agencia no guarda relación con el régimen regulador de las condiciones exigibles para la prestación de los servicios más allá de lo referente a las exigencias de seguridad en el tratamiento de datos y el respeto de los principios contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 y sus disposiciones de desarrollo, cuestiones éstas no reguladas por la Orden CTE/711/2002.

Dicho esto, las reformas propuestas por el Proyecto sometido a informe afectan exclusivamente al Capítulo III de la Orden CTE 711/2002, regulador de las condiciones para la prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, y a su Capítulo IV, por el que se atribuyen recursos públicos de numeración al servicio de consulta telefónica sobre números de abonado y establecimiento de las condiciones particulares para la prestación del servicio, sin guardar dichos preceptos relación con las cuestiones en que la Orden incide en materias vinculadas al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Por este motivo, esta Agencia no tiene observación alguna en lo referente al texto sometido a informe.

No obstante, debe tenerse en cuenta que la Orden CTE/711/2002 fue adoptada con anterioridad a la aprobación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, especialmente el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. Este nuevo marco normativo supuso una reforma del existente a la entrada en vigor de la Orden objeto de reforma por el Proyecto sometido a informe, que en lo que afecta a las cuestiones objeto de la competencia de esta Agencia trajo causa de lo establecido en la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).

El artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE, no modificado por la reforma que la misma sufrió como consecuencia de la adopción de la Directiva 2009/136/CE establece el régimen regulador de la protección de datos en relación con las guías de abonados al servicio de comunicaciones electrónicas, estableciendo lo siguiente:

“1. Los Estados miembros velarán por que se informe gratuitamente a los abonados antes de ser incluidos en las guías acerca de los fines de las guías de abonados, impresas o electrónicas, disponibles al público o accesibles a través de servicios de información sobre las mismas, en las



que puedan incluirse sus datos personales, así como de cualquier otra posibilidad de uso basada en funciones de búsqueda incorporadas en las versiones electrónicas de la guía.

2. Los Estados miembros velarán por que los abonados tengan oportunidad de decidir si sus datos personales figuran en una guía pública, y en su caso cuáles de ellos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor, y de comprobar, corregir o suprimir tales datos. La no inclusión en una guía pública de abonados, así como la comprobación, corrección o supresión de datos personales de una guía, no deberán dar lugar al cobro de cantidad alguna.

3. Los Estados miembros podrán exigir que para cualquier finalidad de una guía pública distinta de la búsqueda de datos de contacto de personas a partir de su nombre y, si resulta necesario, de un mínimo de otros identificadores, se recabe el consentimiento específico de los abonados.

4. Los apartados 1 y 2 se aplicarán a los abonados que sean personas físicas. Los Estados miembros velarán asimismo, en el marco del Derecho comunitario y de las legislaciones nacionales aplicables, por la suficiente protección de los intereses legítimos de los abonados que no sean personas físicas en lo que se refiere a su inclusión en guías públicas.”

El marco normativo actualmente vigente en esta materia en el derecho interno español se contiene en los artículos 67 y 68 del Reglamento del Servicio Universal antes citado, diferenciando claramente las materias relacionadas con el reconocimiento de los derechos de los usuarios en relación con la protección de sus datos de carácter personal en las guías de abonados de las cuestiones referidas a la prestación del propio servicio.

Dicha diferenciación se correspondería con la establecida en los apartados tercero y decimocuarto de la Orden CTE/711/2002, si bien con la importante diferencia respecto de dicho régimen que se deriva de lo establecido en el artículo 67.2 del Reglamento, en que se establece un régimen de consentimiento para la inclusión de los datos de los abonados en las guías, frente al anterior régimen en que únicamente quedarían excluidos de dichas guías quienes lo manifestasen expresamente, ejerciendo su derecho a no figurar en ellas. Así, el artículo 67.2 del Reglamento dispone lo siguiente:

“Para que los datos correspondientes a un abonado a los que se refiere el artículo 30.4 sean incluidos por primera vez en algún tipo de guía o facilitados a otra entidad para su inclusión en ella o para la prestación de servicios de información o de consulta sobre ella, será preciso el consentimiento expreso de dicho abonado. A estos efectos, se entenderá que existe consentimiento expreso de un abonado cuando el operador le solicite su consentimiento para la inclusión de tales datos, con indicación expresa de cuáles serán estos, el modo en que serán incluidos en la guía y su finalidad, y este le responda dando su aceptación. También se producirá cuando este se dirija por escrito a su operador solicitándole que sus datos figuren en la guía.

Si el abonado no hubiese dado su consentimiento expreso, se entenderá que no acepta que se publiquen en la guía correspondiente sus datos.

Una vez otorgado el consentimiento conforme al párrafo anterior, para las sucesivas inclusiones de dichos datos en la guía o su entrega a otra entidad para su inclusión en ella o para la prestación de servicios de información o de consulta sobre ella, bastará con que, en el plazo de un mes, en la comunicación en la que se solicita el consentimiento, el abonado no se oponga expresamente a dicha inclusión.”

Así ha sido analizada la cuestión por esta Agencia en sus informes de 14 de marzo de 2013, referente al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones y 1 de marzo de 2013, relacionado con el Anteproyecto de Circular de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sobre el procedimiento de suministro de datos de los abonados para la prestación de servicios de guías, consulta telefónica sobre números de abonado y emergencias.

El vigente texto de la Orden CTE/711/2002, recoge la mayor parte de los derechos de los usuarios finales de los servicios de comunicaciones electrónicas relacionados con las guías de telecomunicaciones o los servicios de consulta telefónica de números de abonado. Así, el apartado tercero se refiere a la exigencia de consentimiento del interesado para la inclusión en las guías de datos adicionales (coincidente con el artículo 87.3 del Reglamento, si bien la expresión “inequívoco” es reemplazada en el reglamento por “expreso”), los derechos a no figurar en las guías, a que los datos de las mismas no sean tratados con fines de venta directa o a suprimir la referencia a determinados datos personales, así como la prohibición general de directorios inversos. Sin embargo la Orden no recoge una previsión similar a la establecida por el artículo 87.2 del Reglamento del servicio universal.



De este modo, debería plantearse la procedencia de **modificar el apartado tercero de la Orden a fin de incorporar a la misma lo dispuesto en el artículo 87.2 del reglamento del Servicio Universal**, por el que se requiere el consentimiento de los afectados para la inclusión de sus datos en las guías, incluso cuando los mismos sean únicamente los establecidos en el artículo 30.4 del citado Reglamento.